

woumain

Voz indígena del pueblo wayúu que significa NUESTRA TIERRA

Revista del Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as
en Asturias "Luciano Romero Molina"

Nº 25. Agosto 2025

Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia

25/25

Editorial. Amenazas a la paz regional de Nuestra América	3
Un programa precursor de acogidas solidarias. Enrique Santiago	6
Un cuarto de siglo protegiendo vidas	8
Chiquita pero matona. Javier Orozco Peñaranda	10
¿El fin de la historia? Francisco Javier Fernández López	12
En Colombia se abre paso la justicia y la esperanza	15
Asturias visitó Colombia	17
Construyendo democracia en El Chocó. Jesús Yilson Arias Marmolejo	19
La desigualdad de género crea violencia. Claudia Sofía Sarasty Rosero	23
De la comuna 13 a Burgos. Juan Diego Mejía Gómez	26
Cuarenta años de espejismo carbonero en La Guajira. Greyci Alejandra Solano Pérez.....	29
Riesgo para la vida en la región andino-amazónica	32
Simón Trinidad, preso político colombiano en los Estados Unidos	35
Estudiantes hilando la Paz. Stiven Jesús Maldonado Álvarez	37
Nos echan bala les devolvemos canciones. Relato. Javier Orozco Peñaranda	40
Nuestros muertos.....	44

Edita: Colectivo de Colombianos/as Refugiado/as en Asturias "Luciano Romero Molina"

Imprime: Paper&Color

D.L.: AS-03037/2008

woumain

Voz indígena del pueblo wayúu que significa NUESTRA TIERRA

Boletín del Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias "Luciano Romero Molina"
Nº 25. Septiembre del 2025

Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, un cuarto de siglo defendiendo la vida

AGRADECIMIENTOS:

A las gentes y al gobierno de Asturias, a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, a los ayuntamientos de Gijón, Langreo, a Project Defenders, a las organizaciones sociales asturianas que apoyan al Programa de Derechos Humanos y acompañan a las personas acogidas: Amnistía Internacional Unidad Territorial de Asturias; Asamblea Moza d'Asturies, AMA; Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR; Comisiones Obreras de Asturias, CCOO; Comité de Solidaridad con América Latina, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, CSCA; Consejo de la Juventud de Asturias. CMPA; Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, CODOPA; Corriente Sindical de Izquierda, CSI; Ecologistas en Acción de Asturias; Ingeniería Sin Fronteras, Asturias, ISFA; Movimiento Asturiano por la Paz, MASPAZ; Asociación Paz y Solidaridad; Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias SUA-TEA; Confederación Intersindical; Unión General de Trabajadores de Asturias, UGT y de manera especial a SOLDEPAZ PACHAKUTI por gestionar el PAV y por su compromiso internacionalista.

A las organizaciones colombianas que integran el Comité de Selección de casos del PAV: CUT, CPDH, MOVICE, ANDAS, CSPP, ONIC, CAJAR, FENSUAGRO, CNA.

COLECTIVO DE COLOMBIANOS/AS REFUGIADOS EN ASTURIAS "LUCIANO ROMERO MOLINA"

Correo: programasturias@gmail.com
Teléfono 687 003 737

Calle Manuel Llana 42 bajo
C.P. 33208. Xixón-Asturies



Editorial:

Amenazas a la paz regional de Nuestra América

“Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo”. Donald Trump. 12 de Junio/23

“No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.

Siempre hemos temido que el conflicto armado interno y otras violencias asociadas a intereses de multinacionales y al narcotráfico en Colombia sean usadas por los estrategas del imperio como excusa para intervenir en países de Nuestra América, bajo la farsa de un plan contra el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia.

Mr. Trump ya montó la película del “cártel de los soles”, le puso precio a la cabeza del jefe del gobierno de un estado soberano y ordenó un despliegue estratégico de portaviones, fragatas, submarinos, misiles, bombarderos, tropas y material de guerra

en el sur del Caribe, cercando a Venezuela que alerta a sus vecinos y moviliza sus defensas.

El despliegue amenazante viola el Derecho Internacional y es acción de guerra psicológica que sobresalta a nuestros pueblos y hace temer por la seguridad y por la soberanía de los países del Caribe y del área andino-amazónica... Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, Cuba, Panamá...

La presidenta de México Claudia Sheinbaum dejó claro que el país «no aceptará la participación de fuerzas militares de Esta-

dos Unidos en su territorio”.

Venezuela rechazó la amenaza y se sumó el presidente colombiano Gustavo Petro quien advierte que Colombia se saldrá de la OTAN y avisa: “Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe” y añadió que “No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”.

Petro preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC y convocó a los ministros de relaciones exteriores de la región para dar una respuesta conjunta.

Mentiras, guerras, siervos, minerales y petróleo

EUA busca tener gobiernos serviles, romper procesos populares y tomar para las transaccionales riquezas como las de Venezuela.

Lo que quieren los halcones son los minerales, oro, hierro, bauzita, níquel, titanio, zinc, cobre, diamantes, tierras raras, coltán, niobio, torio, bario, petróleo...

Petróleo para la Exxon-Mobil en la Gua-

yana Esequiba reclamada por Venezuela y más petróleo para la Chevron-Texaco que regresó a Venezuela hace pocos días autorizada por el propio Trump que prohíbe bajo amenazas comprar petróleo a Venezuela.

Trump lo dejó claro hace dos años: “Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo”. El objetivo actual es el mismo, ahora con la excusa de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia.

En EUA saben que el problema de las drogas es mundial, que no se resuelve atacando al campesinado, ni controlando sólo los centros de producción y las rutas, porque la mafia crea otras.

Saben que en Colombia hay un gobierno que enfrenta a las mafias del narcotráfico. En tres años ha incautado 2 millones quinientos mil kilos de coca. También el gobierno venezolano ha reportado grandes incautaciones.

Pero también crecen la demanda exterior, la producción nacional y las incautaciones.

Es un problema de salud pública mundial, que pretenden arreglar con más guerras en patio ajeno, pero dejando impune al sector bancario de USA y de Europa que blanquea enormes sumas de la multinacional del narcotráfico y las irriga en el sistema





financiero global.

No atacan el problema en el norte. Los capos yanquis deben ser invisibles porque nunca caen presos. Los ataques siempre son el sur.

Mr. Trump es un gobernante ególatra e insensato. Tiene cuentas pendientes con la justicia. Es el principal cómplice del genocidio sionista en Palestina. Delira, destroza y amenaza, chantajea en todo el mundo con sanciones económicas, bloqueos, aranceles, muros, deportaciones masivas, incremento del gasto en defensa, organiza invasiones contra la delincuencia mientras protege amigos delincuentes como Bolsonaro en Brasil o Uribe Vélez en Colombia.

VENEZUELA NO ESTÁ SOLA

El mundo ya es multipolar. En el sur global crecen las alianzas económicas, culturales y militares fuera de la égida imperial

y Venezuela hace tiempo está en ellas.

La paz de Nuestra América se pone en riesgo si agreden a Venezuela.

Habrà respuesta masiva de los pueblos cansados de injerencias, guerras, expolios, amenazas.

Venezuela NO es la Panamá de 1989, ni el Iraq del 2003.

Somos pueblos diversos, organizados y soberanos que rechazamos las agresiones, los bloqueos, las injerencias y las amenazas del gobierno de los EUA contra países de Nuestra América.

Por la época de la creación del Programa Asturiano de protección comenzó el Plan Colombia, terrorismo de Estado contra la izquierda y de despojo territorial al campesinado con el pretexto de combatir al narcotráfico y a las

guerrillas con asesores gringos e israelíes.

En el otro lado del mundo EUA desataba la invasión de Iraq exhibiendo pruebas falsas.

Ahora asistimos a otra amenaza de invasión esta vez en Nuestra Tierra y con otra falsedad como excusa.

Resistiremos. Somos pueblos organizados, soberanos, llamados a la unidad continental para preservar la paz.

¡ Por la Paz en Nuestra América, NO PASARÁN ¡



Un programa solidario y precursor de solidaridades

Enrique Santiago. Defensor de Derechos Humanos. Secretario General del PCE.

Colombia es un maravilloso país bañado por dos océanos y surcado por tres cordilleras, de selvas impenetrables, sabanas y llanos, un torrente de biodiversidad entre grandes serranías y valles interandinos. Un país también diverso en sus maravillosas y acogedoras gentes: pueblos originarios indígenas, criollos, afrodescendientes, mestizos, pueblos raizales y palenques de hombres y mujeres libres de esclavitud.

Tanta riqueza natural y humana es también causa de desdichas, una especie de condena que parece siempre negar una segunda oportunidad las estirpes que han habitado esa tierra. Ninguna generación colombiana ha conocido la paz plena en ese mágico país. Vaya nuestro recuerdo, reconocimiento y gratitud a todas las víctimas del conflicto social y armado que ha padecido ininterrumpidamente Colombia, prácticamente desde su independencia.

En Colombia la democracia se ha construido sobre el asesinato de líderes políticos y la masacre de militantes sociales, sindicalistas y revolucionarios. La participación política y social ha entrañado un alto riesgo para los y

las colombianas, que se ha pagado con la vida en un número inaceptable de ocasiones.

Patria rica en diversidad, recursos naturales, culturas, pueblos y gentes, climas...Y todavía pobre en paz y fraternidad, aunque por fin y con mucho esfuerzo avanza en libertad y justicia social. Una potencia de la guerra y la violencia que quiere ser una potencia de la vida, que va dando pasos firmes para conseguirlo desde que en el año 2022 por fin llegó a la presidencia de la República un presidente progresista, Gustavo Petro.

La democracia y el bien común han comenzado a germinar sobre surcos abiertos con el sudor del pueblo colombiano. Inmensos dolores y sacrificios de cientos de miles de hombres y mujeres. Personas luchadoras que no han dudado en sacrificar lo más preciado, su bienestar su tranquilidad, su familia, su futuro, su integridad, su seguridad e incluso su vida, por el bien común. Son héroes y heroínas de la democracia y la justicia social. Pero nada habría sido posible sin el apoyo inquebrantable de quienes han cuidado a todas estas personas.

Desde hace 25 años el “Programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia” ha brillado con luz propia, ha

sido un apoyo, una referencia y una esperanza para cientos de luchadores y luchadoras que han sido acogidos en la solidaria tierra de Asturias cuando han tenido que alejarse de peligrosas situaciones de persecución, únicamente por ser defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. El Programa asturiano ha protegido, ha cuidado, ha defendido y ha peleado por todos los defensores y defensoras a los que ha podido llegar con sus limitados y bien aprovechados y administrados recursos. Nacido de las entrañas del movimiento de solidaridad internacionalista asturiano, volcado con el pueblo colombiano. Creado con el esfuerzo y las brillantes ideas de luchadores sociales colombianos refugiados en Asturias, por mineros sindicalistas asturianos, por líderes y lideresas sociales, por activistas sindicales y políticas asturianas. A través de estos hombres y mujeres comprometidos y también luchadoras, Asturias ha devuelto parte de la solidaridad que el pueblo asturiano recibió fuera de nuestras fronteras en tantas ocasiones en las que también nosotros fuimos perseguidos por la intolerancia y el fascismo.

Estos 25 años representan varias décadas de solidaridad. Han permitido acoger a quienes huían del exterminio al que fue sometida la Unión Patriótica, a sindicalistas colombianos perseguidos por las multinacionales, a líderes y lideresas campesinas que luchaban por tierra para sus comunidades y por una reforma agraria que nunca acaba de llegar, a ambientalistas que defienden la biodiversidad y la vida de la rafiña de las empresas extractivas, a representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se alzaban para acabar con la discriminación que sufren sus hermanos. Todas estas personas encontraron un lugar de acogida temporal en la tierra asturiana, con dos finalidades igual de importantes. Preservar su vida y su integridad para poder volver con más fuerza aún a sus luchas cotidianas, y sensibilizar a la sociedad asturiana de acogida dándole a conocer las injusticias sociales y la brutal violencia con la que se persigue a quienes en Colombia luchan por el bien común. Muchas vidas se han salvado gracias al programa asturiano, muchas lideresas han visto fortalecidas sus convicciones y se han podido formar un poco más gracias a la acogida en Asturias. Desgraciadamente

varios de estas personas luchadoras fueron asesinados al regresar a la patria colombiana cargados de optimismo y fuerzas para continuar las luchas por el bien común.

Es de justicia reconocer el apoyo y el acompañamiento que las instituciones públicas asturianas y del Estado han dado a este programa, precursor de muchas otras acogidas solidarias. El gobierno asturiano, numerosos conceyus, sindicatos de clase, organizaciones sociales y partidos políticos han colaborado en hacerlo posible. Pero también hay que mencionar qué instituciones y organizaciones privadas que debieron y pudieron colaborar, rechazaron hacerlo por irresponsabilidad y egoísmo, quizás también por ese odio de clase que acaba trayendo al fascismo.

De lo que apenas se ha hablado es del carácter precursor del Programa Asturiano. Su ejemplo de solidaridad desde el movimiento social, comprometiendo a las instituciones para salvar vidas y proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos, fue seguido en otras tierras de nuestro plurinacional Estado. Programas similares se han organizado en Euskadi, en Cataluña o en el País Valenciá en distintos momentos de estos años, y algunos se mantienen al igual que lo ha hecho el programa asturiano.

El orgullo y el reconocimiento que nos merece el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia, no debe hacernos perder de vista que aspiramos a qué programas como este pierdan su razón de ser. Es decir queremos que no sean necesarios porque ninguna persona en Colombia debe sufrir persecución por defender sus derechos sindicales, el derecho de participación política, los derechos humanos de la gente, los derechos medioambientales de la tierra y de quienes la habitan, los derechos comunitarios de los pueblos, o los derechos de los colectivos vulnerables.

Esa es nuestra mayor aspiración y no me cabe duda que también lo es de todas las personas que han sacado adelante este programa durante todos estos años.

Da igual que se llamen como se llamen, Javier, Ana, Daniel... O tantos otros nombres que lo han hecho posible. Gracias a todas y a todos, nunca habrá como pagaros tanta solidaridad.



Un cuarto de siglo protegiendo vidas

Un cuarto de siglo completa Asturias recibiendo en refugio temporal de medio año a personas de la dirigencia social colombiana con riesgo de hacer asesinadas por defender los derechos humanos, el medio ambiente, la paz con justicia social.

En ese lapso se han acogido 152 personas (51 mujeres y 101 hombres), 45 sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores CUT; 22 de la dirigencia campesinado e indígena; 85 defensoras de los derechos humanos.

Un recorrido que abrió camino a iniciativas similares en otras regiones solidarias de España y de Europa.

Un cuarto de siglo protegiendo la vida de personas que asumen el riesgo de plan-

tarse en nombre y representación de las multitudes ante los agentes del terror, para defender valores y bienes comunes, la Madre Tierra y los territorios que oxigenan al planeta.

Veinticinco años de humanismo, de acciones de diplomacia ciudadana por la paz y por los derechos humanos que incluyen 21 visitas a territorios bajo conflicto social y armado, y otros tantos informes asturianos al mundo sobre el estado de los derechos humanos y los anhelos de paz en Colombia, informes que entraron a formar parte de la historia, porque han sido entregados a La Comisión de la Verdad y en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como aportes a la memoria de los pueblos y a la búsqueda de justicia para la víctimas de los crímenes del

Estado en su larga lucha contra la impunidad.

Como parte de la dirigencia social colombiana expresamos nuestra gratitud al Ministerio Español de Asuntos Exteriores en Madrid y en Bogotá, a las instituciones asturianas, la Agencia de Cooperación, la dirección de la Agenda 2030, los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Langreo, Tevera, Mieres, Castrillón, Vegadeo y Soto del Barco, a la Junta General del Principado y a comisión de organizaciones que arropan el programa asturiano de protección y a las personas acogidas:

1. Amnistía Internacional Unidad Territorial de Asturias
2. Asamblea Moza d' Asturias, AMA
3. Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR
4. Comisiones Obreras de Asturias, CCOO
5. Comité de Solidaridad con América Latina, COSAL
6. Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, CSCA
7. Consejo de la Juventud de Asturias. CMPA.
8. Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, CODOPA.
9. Corriente Sindical de Izquierda, CSI
10. Ecologistas en Acción de Asturias.
11. Ingeniería Sin Fronteras, Asturias, ISFA
12. Movimiento Asturiano por la Paz, MASPAZ,
13. Asociación Paz y Solidaridad
14. Asociación Soldepaz Pachakuti
15. Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias SUATEA - Confederación Intersindical.
16. Unión General de Trabajadores de Asturias, UGT.

El Colectivo de Colombianos-as Refugiados en Asturias expresa su gratitud por la solidaridad política que forma parte de la memoria de un pueblo en lucha por la paz con justicia social:

GREYCI SOLANO. Lideresa social, comunal y sindical, defensora de los dere-

chos humanos, delegada ante la asamblea del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón, SINTRACARBON-CUT. Presidente la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Barrancas-Guajira.

CLAUDIA SARASTY. Abogada, defensora de los derechos humanos, defensora de prisioneros-as por motivos políticos, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.

MAYDANY SALCEDO. Lideresa campesina y ambiental, defensora de las selvas de la cuenca del Putumayo – Amazonas. Presidenta de la Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte – Cauca, ASIMTRACAMPIC.

MÓNICA ARROYAVE TORO, Ingeniería biomédica, estudiante de derecho y defensora de los Derechos Humanos. Responsable del área de Derechos Humanos y Paz de la JUCO en Medellín.

YILSON ARIAS. Antropólogo, Licenciado en inglés y francés, especialista en gerencia de servicios sociales, defensor de los derechos humanos, líder comunal y asesor de consejos comunitarios en el Chocó; integrante del Comité de impulso de la Sociedad Civil a los Diálogos de Paz entre el ELN y el gobierno nacional.

STIVEN MALDONADO. Líder estudiantil y cívico en la ciudad de Barranquilla; secretario de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-COLOMBIA y director de la Organización Continental Latinoamericana y caribeña de Estudiantes, OCLAE.

JAVIER OROZCO PEÑARANDA, exsindicalista de SINTRADIN, FENALTRASE y CUT Colombia; integrante del Comando de Paro de las Centrales Obreras hasta 1998. Coordinador desde el 2001 del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia y técnico de las veintidós Delegaciones Asturianas de Derechos Humanos y Paz.



Chiquita pero matona

Javier Orozco Peñaranda. Coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos.

La vieja compañía bananera United Fruit Company que convirtió en feudos a las jóvenes repúblicas centroamericanas, heredó las malas mañas a su hija la glamorosa CHIQUITA BRANDS que resultó peor que su madre, beneficiada con la masacre de las bananeras en Ciénaga, hace un siglo, cuando el ejército asesinó a mansalva centenares de obreros en huelga en las plantaciones en las que García Márquez situaría Macondo.

El 23 de julio/25 -dos meses antes de que prescribiera el proceso- un juzgado de Colombia condenó a los directivos de

la Chiquita a 11 años de cárcel por pagar, armar y beneficiarse del terror anti sindical en las zonas bananeras de Colombia.

La Chiquita embarcaba cargamentos de bananos desde el golfo de Urabá en Colombia hacia los Estados Unidos y en el viaje de vuelta -en puerto Zungo- descargaba las armas, fusiles y las municiones, con los que los paramilitares asesinaron un millar de dirigentes obreros, comunales y de las negritudes rebeldes por el despojo violento de sus territorios colectivos.

Hace 17 años la fiscalía colombiana abrió investigación preliminar contra Chiquita, su hermana BANALDEX y sus pri-



mas las comercializadoras Unibán, Probán, DelMonte y Suninsa.

En el 2007 la Chiquita admitió desde su sede en Cincinnati haber pagado dos millones de dólares al grupo paramilitar AUC entre 1997 y el 2004. Por hacer tratos con organizaciones terroristas le impusieron una multa de 25 millones de dólares pagaderos en USA no en Colombia donde se beneficiaba del terror.

Los pagos a los grupos paramilitares los hizo en efectivo a través de la empresa de vigilancia “Convivir Papagayo”, figura inventada en el gobierno de ALVARO URIBE VÉLEZ para darle barniz legalizante al terrorismo empresarial.

Un siglo después la hija de la United Fruit sigue los pasos de su poderosa madre y da cátedra mundial de acumulación de capital por despojo.

Hizo falta UN SIGLO y la presentación del caso Chiquita ante la Corte Penal Internacional y un gobierno de izquierdas en Colombia, para que la justicia de Macondo se atreviera a juzgar a Uribe y condenar a

una de las maestras del terror que acompaña a las multinacionales, cada una con su grupo de bandidos.

La lista es larga. Detrás de la Chiquita hay otras multinacionales con las mismas prácticas como Nestlé, las mineras Drumond, AGA, Gran Tierra, Frontera Energy y la refrescante Coca Cola, anunciada como “La chispa de la vida” mientras caían asesinados doce de sus dirigentes sindicales en Colombia.





¿El fin de la Historia?

*Francisco Javier Fernández López.
Activista de Amnistía Internacional Asturias.*

Me resulta ahora curioso recordar el Año 2000, aquel año en el que, justo el uno de enero, se iba a producir una gran catástrofe porque los ordenadores no iban a saber cambiar de fecha y todo iba a colapsar. Incluso el Gobierno español había constituido un gabinete de crisis que, según se comentaba, se encontraría reunido en una especie de búnker para controlarlo todo. Sin embargo, nada de aquello ocurrió, podíamos respirar tranquilos. Comenzaba un nuevo milenio en el que, según las predicciones de Francis Fukuyama, se produciría “el fin de la historia”: una vez terminada la “guerra fría”, la democracia liberal pondría el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, ya no habría más guerras y

la economía liberal satisfaría todas las necesidades humanas en todo el mundo.

Lejos de producirse “el fin de la historia”, aquel año fue más de lo mismo. Ejecuciones extrajudiciales en 61 países, desapariciones en 30, tortura o malos tratos en 125, presos de conciencia en 63,... nos contó el informe de Amnistía Internacional. La FAO nos alertaba de que 900 millones de personas sufrían de hambre en el mundo. Tampoco cesaron las guerras en lugares como el Congo, Etiopía, Eritrea, Afganistán, Somalia, o el Delta del Níger, por no hablar de la invasión de Kuwait, antecesora de la Guerra del Golfo. Conflictos bélicos originados en su mayor parte por intereses económicos o comerciales.

Para quienes formábamos parte de

Amnistía Internacional en Asturias, el año 2000 fue un año de muchas reuniones. Habíamos aprobado en nuestra Asamblea anual nada menos que elaborar una propuesta para que nuestra comunidad autónoma contase con un Programa Global de Derechos Humanos que fuese asumido y desarrollado por el Gobierno asturiano, tanto en política interior como exterior. No sólo se trataba de medidas relacionadas con la cooperación al desarrollo, contra el racismo y la homofobia, en favor de la educación en derechos humanos ... sino también para avanzar en el derecho a un trabajo justo, a una vivienda digna o a la sanidad universal. Decenas de reuniones con un gran número de asociaciones de todo tipo para elaborar un documento ambicioso.

También en el año 2000 fue cuando, como siempre cuento, recibí la llamada de Javier Arjona en aquel teléfono fijo de mi casa -porque todavía no tenía móvil- en la que me preguntaba por el funcionamiento del Programa de Amnistía Internacional para la acogida temporal de defensores de derechos humanos, puesto que algunas personas estaban contemplando poner en marcha algo similar en Asturias con sindicalistas y activistas colombianos perseguidos. Por supuesto, me pareció muy interesante y, además de intercambiar opiniones, la propuesta de contar con un programa del Principado para acoger temporalmente a personas defensoras de los derechos humanos pasó a ser uno de los puntos destacados del proyecto del Programa Global que estábamos elaborando junto a otros colectivos.

Paralelamente a todo esto, se daban los primeros pasos aquí y en Colombia para poner los cimientos de lo que más tarde se conocería como "Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia", uno de los países prioritarios para el trabajo de Amnistía Internacional y del que también proceden varias de las personas protegidas por la Sección española, alguna de ellas en Asturias.

Así llegamos a aquel episodio que tantas veces he relatado, de la tarde del 11 de septiembre de 2001, en la que mientras se desmoronaban las Torres Gemelas y un avión se estrellaba sobre el Pentágono, en Oviedo un puñado de organizaciones presentábamos ante el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José García, y el Director General de Servicios Sociales, Carlos Madera, el mencionado Programa Global de Derechos Humanos. No estábamos ante "el fin de la historia", sino ante un punto y seguido de la misma historia.

Es difícil olvidar aquella sensación de que nada bueno se preveía para la evolución de los derechos humanos en cualquier parte del mundo; a menudo recuerdo la conversación con Javier Orozco en el viaje de vuelta de la reunión. El Terror de la "guerra contra el terror", cuyas consecuencias todavía sufren cientos de miles de personas, y el desprecio por los derechos humanos que cada vez con más frecuencia, exhiben las élites políticas y económicas, son sólo dos ejemplos de lo que casi no podíamos imaginar. En lo que va de milenio, la defensa de los derechos humanos se ha convertido, más allá de un gesto solidario, en una cuestión de supervivencia.

Supervivencia es precisamente la palabra clave que, bajo mi punto de vista, mejor define al "Programa Asturiano de Derechos Humanos en Colombia". No sólo porque es una de las pocas propuestas que cristalizaron del Programa Global inicial, ni tampoco porque año tras año ha sido capaz de superar todo tipo de dificultades legales, políticas, burocráticas y administrativas para conseguir la llegada, estancia y regreso de cada grupo. Ni siquiera por haber resistido las reticencias de algunos de los gobiernos que hemos tenido en Asturias o incluso el claro intento de supresión por parte de uno de ellos, cuya efímera duración lo impidió. En mi opinión, lo que más destaca del Programa es su capacidad para permanecer fiel a su razón de ser y de actuar después de tantos años y tantos ava-

tares, para no ceder ni un solo milímetro en su vocación de apoyo, acompañamiento, denuncia y lucha por algo que se considera justo.

Asimismo, en el Programa Asturiano ha pervivido el legado de décadas de trabajo solidario de colectivos del ámbito político, sindical, social o cultural, como los comités y otras asociaciones de solidaridad con América Latina y organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluso algunas vinculadas a la Iglesia católica. Sin duda, una de las claves del éxito de esta iniciativa es haber recogido este legado e incluirlo en la comisión de organizaciones de apoyo, de la que forma parte desde el primer momento Amnistía Internacional Asturias. Todo ello con Soldepaz Pachakuti como entidad impulsora y administradora, la asistencia técnica de la CEAR y el auspicio de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Sin olvidar la aportación de diversos ayuntamientos y de la plataforma "Protect Defender" de la Unión Europea, así como de los profesionales que de forma voluntaria dan apoyo social y emocional.

Demosttraciones de supervivencia son algunas de las experiencias que nos han enseñado todas y cada una de las personas colombianas que han compartido con nosotros en Asturias un corto, pero segura-

mente intenso, trayecto de su vida. Más allá de las reuniones, encuentros y actividades que podría enumerar, creo que lo que más huella nos ha dejado son los testimonios de nuestros compañeros y compañeras colombianas. Ahora somos conscientes de que el precio que tienen que pagar en muchas ocasiones por el coraje y tesón que derrochan, es su propia familia, su salud o incluso su muerte ordenada por quienes representan precisamente aquello que combaten, como en el caso de Luciano Romero y Henry Ramírez. Sin embargo, su labor sindical, estudiantil, medioambiental, de liderazgo social, de defensa de los derechos indígenas, de las mujeres ... sigue amenazada ... pero de supervivencia, de vida.

Así que, cuando de nuevo vuelvo a escuchar que la historia de la humanidad ha llegado a su fin, que definitivamente han ganado los intereses de los poderosos, que es imposible hacer justicia, que el cambio climático es irreversible, que hay que resignarse ante los genocidios,... pienso en aquel inicio del milenio y trato de recordar los nombres, las caras y las voces, tan distintas entre sí pero tan iguales en su dignidad, que desde Colombia nos han hecho -nos hacen saber- que la historia y la lucha continúan, en su país, en el nuestro y en el mundo entero.



Presentación del Informe 2025. Los Derechos Humanos en el Mundo, por Amnistía Internacional. Oviedo



En Colombia se abre paso la justicia y la esperanza

*“El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla frente al poder”
Sandra Liliana Heredia, jueza 44 penal de Bogotá.*

Cuando en Colombia una jueza de la república condena a pena de pérdida de la libertad al expresidente ALVARO URIBE VÉLEZ por intentar engañar a la justicia sobornando testigos, está reafirmando el principio de que en una democracia nadie está por encima de la ley.

URIBE forma parte de las élites que por décadas han usado métodos ilegales para aumentar su poder económico y político. El país de a pie, acostumbrado a la impunidad, estaba convencido de que la justicia solo era para los de abajo. Hasta que llegó

este fallo que sanciona a un “intocable” devolviendo a la ciudadanía la confianza en que la justicia puede funcionar, investigar, discernir y atribuir responsabilidades sin dejarse sobornar ni amedrentar por el poder, incluso cuando es tan peligroso como el que rodea y protege a URIBE.

El fallo histórico de la justicia colombiana que condena al expresidente URIBE VÉLEZ genera un precedente necesario a tener en cuenta por unas élites acostumbradas a manejar el país como si fuera su finca, al chorro de dinero de los negocios ilícitos y de la corrupción, a ejercer poder político corrompiendo o forzando electores y a concentrar poder territorial mediante el despojo violento e impune de las tierras del

campesinado.

La condena en primera instancia al ex-presidente innombrable desató la indignación de la derecha política colombiana y la de personajes del partido republicano y del Departamento de Estado de Donald Trump en los Estados Unidos, enloqueció a periodistas célebres por usar los micrófonos de los monopolios mediáticos para difamar a la izquierda y para intoxicar a la opinión pública, alebrestó a la delincuencia de cuello blanco -incluidos los hijos de URIBE- acostumbrados a disponer de lo público con impunidad absoluta.

La reacción de la caverna contra la justicia pone en alto riesgo la vida de las dos valientes mujeres que llevaron el proceso, la jueza 44 penal de Bogotá SANDRA LILIANA HEREDIA y la fiscal MARLENE ORJUELA y compromete la seguridad de los magistrados que aboquen la solución de los recursos que prevé la ley en la segunda instancia.

Toda nuestra solidaridad para ellas y para los operadores de la justicia que mantienen su independencia frente a los poderosos a riesgo de su vida.

La retaliación por aplicar la justicia a URIBE VELEZ amenaza también la vida y la honra del senador de izquierda IVAN CEPEDA y la de sus abogados. El senador Iván Cepeda es hijo del senador de la Unión Patriótica MANUEL CEPEDA VARGAS, asesinado en 1994 en Bogotá por militares y paramilitares. Cepeda es un hombre honesto que perseveró por muchos años exigiendo que la justicia funcionara. Es el mismo propósito de las familias de las víctimas de crímenes muy graves cometidos con responsabilidad de la jefatura del Estado como la ejecución extrajudicial de 6.402 jóvenes civiles asesinados por el ejército nacional cumpliendo órdenes de Uribe que exigía a las tropas bajo su mando “li-

tros de sangre” para aparentar éxitos en la lucha contra las guerrillas.

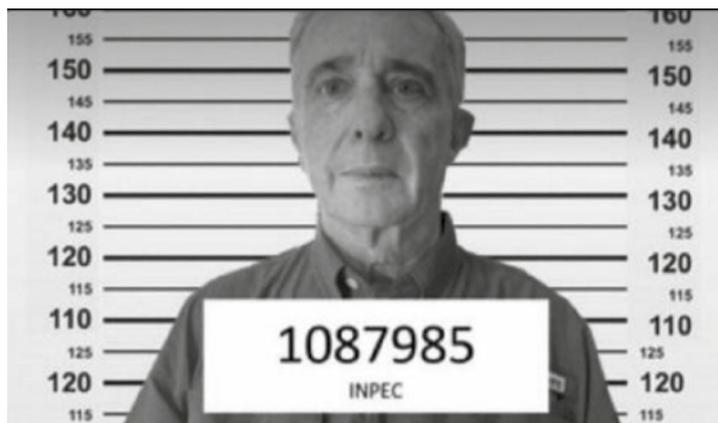
A URIBE VELEZ le esperan cerca de doscientos procesos penales más por crímenes de guerra, tan graves por sistemáticos y masivos que no prescriben con el paso del tiempo, también por sus vínculos con los carteles del narcotráfico, además por ordenar la muerte en masa contra pueblos enteros como ocurrió en las masacres del Aro y de La Granja, o la desaparición forzada de medio millar de jóvenes de la Comuna 13 de Medellín asesinados bajo sus órdenes y los cuerpos botados en La Escombrera, lugar en el que empiezan a encontrarlos sus madres.

Desde Asturias expresamos de manera pública todo nuestro apoyo a la jueza y a la fiscal del caso Uribe. Toda nuestra solidaridad para el senador CEPEDA y sus abogados, nuestra admiración por la gente honrada que es mayoría, que construye democracia, justicia, decencia y futuro en medio del peligro.

La hermosa y diversa Colombia saldrá del pantano de la violencia si logra superar el mal ejemplo por la impunidad de la que goza su plutocracia, si genera equidad y se reafirma en que el país no es una finca de nadie -ni de URIBE ni de los gringos- y que nadie está por encima de la ley.

Colectivo de Colombianos-as Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina” Soldepaz Pachakuti.

Xixon, agosto del 2025.





La Delegación Asturiana en la movilización social de apoyo a las reformas del gobierno Petro. Bogotá 18 de marzo/25

Asturias visitó Colombia

“La violencia no logra paralizar la defensa de la vida en los territorios, ni los anhelos de equidad y de paz” XXI Delegación Asturiana en Colombia. Bogotá, 22 de marzo/25.

“La violencia no logra paralizar la defensa de la vida en los territorios, ni los anhelos de equidad y de paz” XXI Delegación Asturiana en Colombia. Bogotá, 22 de marzo/25

La Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz visitó territorios en conflicto social y armado en Colombia entre el 9 y el 22 de marzo/25. La visita integrada por veintidós personas en representación de doce organizaciones asturianas fue encabezada por JUAN GONZÁLEZ PONTE, Director General de la Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias, DELIA CAMPOMANES ISIDORO, Diputada en la Junta General del Principado de Asturias, grupo político Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida-Más País-IAS y

AMADO AGUSTÍN MEDINA MARTÍNEZ, Concejal de Bienestar Social y Cooperación del Ayuntamiento de Avilés.

Conclusiones de la visita de la Delegación Asturiana:

Colombia avanza en calidad democrática por sus avances en la construcción de Estado Social de Derecho, por la lucha contra la inequidad, la exclusión y la corrupción.

La política de Paz Total se está encontrando con la falta de voluntad de paz de los grupos armados.

El conflicto armado interno se expandió y se degrada, afectando cada vez más a la población civil sobre todo al campesinado, pueblos indígenas y comunidades afro.

Jalonado por el narcotráfico el conflicto colombiano amenaza con volverse un problema regional, al extenderse a países vecinos como Ecuador y Venezuela.

La inseguridad urbana también ha cre-

cido con la proliferación de bandas delin cuenciales algunas con carácter transnacional, como los carteles de origen mejicano y bandas como el Tren de Aragua de origen venezolano.

La búsqueda de la paz y de la seguridad como aspiración, derecho ciudadano y deber del Estado, es una prioridad del gobierno patente en los programas y reformas en curso para beneficiar a la población en estado de pobreza y de miseria.

Se hacen esfuerzos por reducir la ausencia histórica del Estado y de los servicios sociales en los territorios y por superar la descoordinación entre instituciones. Hay territorios en los que los grupos armados no permiten el ingreso de funcionarios del Estado.

El paramilitarismo, brazo armado del narcotráfico, de algunos terratenientes, empresarios y corruptos, se expande sobre los territorios que abandonó el gobierno de IVAN DUQUE tras la desmovilización de las FARC. Es una de las causas principales del actual ciclo de violencia.

Reviste gravedad la sistematicidad de los ataques contra las organizaciones y la dirigencia social.

Los grupos armados que han capturado sectores del Estado, están usurpando la voz

comunitaria y secuestrando la democracia local, amenazando la existencia del movimiento social colombiano que es el motor de los cambios y de los avances democráticos hacia la paz con justicia social.

Tras siglos de abandono en extensos territorios las comunidades rurales tuvieron que suplir con la organización, la autogestión comunitaria y la solidaridad, la ausencia del Estado.

Los grupos armados asumieron por décadas las funciones del Estado y al retirarse como hicieron las FARC, dejaron un vacío de poder que llenaron otros grupos armados, guerrillas y paramilitares.

La impunidad estructural continúa. La fiscalía no investiga amenazas y pocos homicidios tienen responsables materiales y sobre todo intelectuales procesados.

La población se ve sometida por las armas ante la ausencia del Estado y normaliza el que la guerrilla o los paramilitares impartan justicia, intervengan en casos de violencia intrafamiliar, drogadicciones, disputas por linderos, actos delin cuenciales y castigos a infractores, incluso en algunas zonas del Norte de Santander han intentado imponer un carnet de identidad a la población para poder movilizarse.



La Delegación Asturiana en la ONU-Bogotá



Construcción democracia en el Chocó

Construyendo democracia en el departamento del Chocó: un enfoque integral

Por Jesús Yilson Arias Marmolejo. Licenciado en inglés y francés. Antropólogo – investigador social. Especialista en gerencia de servicios sociales. Maestrando en Derechos Humanos

El departamento del Chocó, ubicado en la región del Pacífico colombiano fronteriza con Panamá, es un territorio rico en diversidad cultural y natural. Sin embargo, enfrenta obstáculos que impiden la parti-

cipación ciudadana y la construcción de democracia, especialmente para las comunidades negras afrocolombianas y para los pueblos indígenas que lo habitan. En este artículo se analizan los espacios de participación ciudadana en la construcción de planes de desarrollo en territorios étnicos y los efectos de la violencia derivada del conflicto armado y de la acumulación por despojo, que cercenan la calidad de la democracia y las posibilidades de vida digna en la región.

La Constitución de 1991: Un Punto de

Partida para la Construcción de Democracia

La Constitución de 1991 redefinió los valores constitucionales de Colombia consagrando la participación ciudadana, la planeación participativa del desarrollo y la multiculturalidad como principios fundamentales de la Nación, superando la marginación encubierta de los grupos étnicos y avanzando en la construcción de un modelo de Estado donde la ciudadanía, las regiones y las minorías juegan un papel fundamental en la definición del destino colectivo.

Espacios de Participación Ciudadana en la Construcción de Planes de Desarrollo

La Constitución de 1991 posibilita la participación ciudadana en la planificación, definición de objetivos, metas y políticas para el desarrollo territorial. En el caso del Chocó existen espacios de participación ciudadana que debieran permitir a las comunidades étnicas influir en la elaboración de los planes de desarrollo. Algunos de estos espacios incluyen:

- La consulta previa: es un mecanismo de participación que permite a las comunidades étnicas ser consultadas previamente

sobre los planes y proyectos que puedan afectarles directa o indirectamente. Se deriva del Convenio 169 de la OIT.

- Los planes de desarrollo departamentales y locales, son instrumentos de planificación que orientan el accionar de los diferentes actores del territorio durante un periodo de gobierno.

- Los mecanismos de participación ciudadana, en la formulación y ejecución de planes de desarrollo, la participación en la toma de decisiones, en el control y en el seguimiento de la gestión pública.

- Los espacios asamblearios de los consejos comunitarios de las comunidades negras que definen sus planes de etnodesarrollo y los pueblos indígenas que estructuran sus planes de vida para la armonización territorial.

El Impacto de la Violencia Armada en la Construcción de Democracia

La violencia armada que afecta a la construcción de democracia en el Chocó. Debido a su posición geopolítica estratégica, con acceso a los dos océanos, el Chocó tiene ventajas significativas a nivel mundial. Sin embargo, el conflicto armado, la





discriminación, el racismo, el abandono estatal y la corrupción local, son obstáculos para crear una democracia amplia, efectiva.

- El desplazamiento forzado: La violencia genera el desplazamiento forzado de las comunidades, afecta la territorialidad y rompe las dinámicas comunitarias y la identidad cultural.

- Las resistencias territoriales: como respuesta al conflicto armado interno han surgido iniciativas de paz y formas de resistencia comunitaria a la guerra. Los consejos comunitarios y los resguardos y cabildos indígenas, las organizaciones de mujeres y de jóvenes, generan dinámicas que defienden la permanencia y la paz en el territorio, construyen vida comunitaria fundada en la autogestión y la dignidad. La acción política del gobierno del presidente Petro para la construcción de Paz Urbana dialogando con las bandas delincuenciales del municipio de Quibdó, es una esperanza para las comunidades.

- Transformaciones territoriales: El conflicto armado está ligado a los intereses de clanes políticos corruptos, a los de las empresas mineras y a las dinámicas violentas de la multinacional del narcotráfico, generando serias dificultades para la gestión co-

munitaria del territorio y para la construcción de paz duradera y con derechos.

La Necropolítica en el Chocó

Las élites que gestionan el Estado han generado en el Chocó una política de delincuencia institucionalizada que se sirve de la exclusión, del silencio y de la muerte, una necropolítica, según el concepto desarrollado por el escritor Achille Mbembe.

Los necropolíticos se valen de la violencia extrema, organizada e impune, para someter a la población y controlar los territorios. En el caso del Chocó, la necropolítica se manifiesta en la violencia sistemática y selectiva contra las comunidades negras y pueblos indígenas, lo que genera un clima de miedo, un terror que impide la participación ciudadana y la construcción de democracia.

La paradoja del Chocó: riqueza natural y pobreza monetaria

El Chocó es un departamento con una gran riqueza natural, no solo por su biodiversidad, flora y fauna, también por los yacimientos de minerales indispensables para el avance de las tecnologías como oro, coltán, platino, manganeso, cromo y otros minerales que están siendo saqueados por

empresas como VOLADOR COLOMBIA, MINERA COBRE, MAX RESOURCES, TERRA NOVA, COMMINER JIREH GOLD, ATICO MINING CORP., agentes del expolio evaden o manipulan la consulta previa a los pueblos indígenas que viven en el territorio desde hace milenios y a las comunidades negras que llegaron huyendo de la esclavitud en los últimos tres siglos

Hay mucha minería artesanal en el Chocó y cada vez más grandes empresas que entran con embarcaciones, camiones y helicópteros y se llevan los minerales, dejando en la región violencia, problemas ambientales y una pobreza extrema.

Esta paradoja es producto de la falta de gestión con visión comunitaria y de país, un resultado del soborno y de la ausencia de políticas que beneficien a las comunidades locales. La riqueza natural del Chocó se explota por empresas extranjeras que no generan beneficios para la población local.

Desafíos para la Construcción de Democracia

- Abandono estatal: La falta de presencia estatal efectiva en la región ha permitido que grupos armados ilegales ejerzan

un control con violencia sobre territorios y comunidades.

- Discriminación y racismo: Exacerba las tensiones sociales al enquistarse los clanes corruptos, eliminando la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.

- Gestión territorial: la ausencia de participación comunitaria efectiva en la gestión territorial genera desolación y violencia, afecta las posibilidades de construcción de paz y democracia de calidad.

El Chocó, por su ubicación geoestratégica entre los dos océanos y por su riqueza natural y cultural, necesita una gestión integral, participativa, que zanje la pernicioso injerencia de la corrupción y de la violencia ligada a intereses económicos excluyentes, que mantienen a la población local sitiada, condenada al silencio y a una pobreza extrema que rebasa los límites de la naturaleza y de la dignidad humana.





La desigualdad de género crea violencia

“Las palmas de mis manos tienen más memoria que mi memoria” F.E.

Claudia Sofía Sarasty Rosero. Abogada especializada Defensora de Derechos Humanos (CPDH Colombia).

La igualdad de género es un derecho humano fundamental y uno de los elementos esenciales para construir un mundo pacífico y justo. La desigualdad respecto de los hombres representa un desafío para el Estado moderno ya que impide el acceso a los derechos de manera igualitaria.

Históricamente la desigualdad se basa

en el hecho de que el ser mujer se ha construido socialmente de manera discriminatoria, a pesar de que las normas nacionales e internacionales reconocen que hombres y mujeres son iguales y tienen los mismos derechos.

Para lograr la igualdad de género es necesaria una sociedad incluyente en la que las mujeres tengan acceso al poder, a espacios políticos y a empleos más dignificantes.

Hay algunos avances en las últimas décadas: más niñas y niños están escolarizados, hay menos niñas forzadas al matrimonio precoz, hay más mujeres con cargos de gobierno y en posiciones de liderazgo. Las leyes y sobre todo la movilización de las mujeres impulsan la igualdad de género.

El objetivo de la movilización mundial de las mujeres es poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres, niñas y niños, eliminar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y todas las formas de violencia basadas en género en los espacios público y privado.

Promover la igualdad de género como un derecho humano fundamental es esencial en todos los ámbitos para vivir en una sociedad sana. Incluye la eliminación de la pobreza y la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar de niñas y niños. Sobre todo, porque la desigualdad de género permea toda la sociedad y está presente en las relaciones personales, familiares y sociales, en las instituciones y en las políticas públicas, afectando a la toda la comunidad.

Un factor que genera atraso en equidad e igualdad es que las autoridades priorizan el crecimiento económico y relegan los planes de desarrollo inclusivo, a pesar de que las mujeres se ven más afectadas por la po-

breza derivada de los bajos salarios y de los altos niveles de violencia en espacios privados y públicos, el acoso sexual, la diferencia salarial de género y la desigualdad en la representación y en la participación política de las mujeres.

Las ciudades deberían ser lugares propicios para la igualdad de género y para el empoderamiento de las mujeres, al ofrecer más posibilidades de acceso a la educación, a la justicia y a un trabajo digno, frente a la situación de las mujeres que viven la exclusión en el sector rural.

El trabajo social, la motivación, la pedagogía en el empoderamiento, deben enfocarse en fortalecer los conocimientos y las capacidades para que las adolescentes y las mujeres hagan uso de su libertad y tomen las decisiones sobre su propia vida.

El costo de la desigualdad de género es enorme porque agrava la vulnerabilidad de los hogares dada la menor remuneración del trabajo de las mujeres, lo que afecta las dinámicas económicas y genera sociedades excluyentes, atrasadas, empobrecidas y basadas en la violencia, en el dominio cultural masculino y de clase.

Para lograr cambios significativos en materia de igualdad de género es necesario incluir de manera decidida este principio en la educación, aumentar la sensibiliza-





De la Comuna 13 a Burgos

Juan Diego Mejía Gómez. Integrante del MOVICE, acogido por el Programa de Protección de Burgos.

“¡Tenemos cine, tenemos cine!”, gritaban los niños y niñas que se habían colado en el patio de la escuela Pedro J. Gómez, en el barrio El Salado de la Comuna 13 de Medellín. Esa tarde, cuando inflamamos la pantalla y el sol empezó a caer, un pequeño corrillo alrededor de la computadora, con ojos atentos a la proyección y las risas y saltos de los más inquietos, dejaban claro que la expectativa ya estaba encendida.

El día anterior, sin tener nada preparado, habíamos improvisado una sala de cine en el comedor escolar. Pero esta vez era distinto: las sillas estaban dispuestas en or-

den y el sonido ya había sido probado. La proyección era especial: La cigüeña de Burgos, un documental de 81 minutos narrado principalmente en catalán. Su directora estaba allí, frente a un público compuesto en su mayoría por niños del barrio. En la película, Joana Conill invitaba a conocer a su padre y, en esa búsqueda de respuestas acerca de un pasado que le fue ocultado, recorría España mientras viajaba por la memoria de Jordi, un anarquista catalán condenado a muerte por terrorismo durante la dictadura franquista y represaliado en el penal de Burgos.

Los niños veían una película en un idioma que no podían entender, algunos apenas alcanzaban a seguir los subtítulos. Además, no era una obra pensada para un



público infantil y, aún así, no apartaron la mirada de la pantalla en ningún momento. No sé qué encontraron en esas imágenes, ni qué pudieron retener del catalán. Tampoco sé qué pensamientos atravesaron a Joana cuando, al terminar, se quedó mirando las luces de la ciudad después de habernos compartido la intimidad de su vida.

Ver a esos niños y niñas que crecen en un lugar marcado por las memorias del conflicto me llevaba a pensar que, aunque ellos no lo hicieron consciente, la historia que Joana nos presentaba dialogaba profundamente con la historia de sus familias. Con la mía. Alzamientos en armas, luchas por el poder, víctimas y victimarios: nuestra lucha constante contra el olvido.

La historia de Joana resonaba en la mía. Jordi, su padre, pasó años en el penal de Burgos; mi hermano Hermey fue desaparecido en Medellín, en la misma Comuna 13, dos meses después de la Operación Orión. Ella reconstruía la vida de un padre que sobrevivió a un régimen totalitario; yo sigo hablando de la existencia de mi hermano y continúo luchando por hallar sus restos en La Escombrera, donde la tierra guarda heullas del horror paramilitar.

En una de las últimas imágenes de la película, Joana se acercó por primera vez al penal con un ramo de flores en la mano. Habló con el vigilante de la entrada y le preguntó si esa era la puerta por donde ingresaban los presos. Tal vez, en su imaginación, veía a su padre cruzando ese umbral. Tal vez pensaba en aquellas noches en que, por esa misma puerta, grupos

de prisioneros recibían la boleta de libertad que, en realidad, los conducía a Estepar, donde eran fusilados e inhumados.

Yo también dejo volar la imaginación cuando espero en la portería de La Escombrera a que el vigilante levante la talanquera y nos permita entrar. En mi mente, ese camino polvoriento se convierte en la escena de los últimos pasos de mi hermano. Lo imagino intentando hacer ajena el dolor de la tortura y pensando, quizás, en el peso del sufrimiento que quedaría sobre mamá.

Meses después coincidí nuevamente con Joana. Conversamos sobre archivos, sobre películas hechas por hijos de militantes, sobre memorias personales y domésticas. Qué suerte la suya de tener ese registro en vide de su infancia con su padre. Yo, en cambio, no puedo recordar la voz de mi hermano ni dimensionar su estatura. Existen otros elementos para recordar, las memorias de tu hermano habitan en ti, Juan, me dijo. Y sí: la memoria también habita en el sentir, en lo intangible, en un gesto o en una conversación que atesoramos para siempre.

Años después recibí una noticia que parecía improbable: viajaría a España, acogido en un programa para defensores de derechos humanos, precisamente en Burgos.

¡No me lo puedo creer, Juan!, me repitió Joana varias veces cuando se lo conté. Y



Encuentro de los programas de protección de Asturias y Burgos

añadió algo que confirmé en mis primeras semanas allá: Conocerás personas muy lindas; el antifascismo más resiliente está en Burgos. Y es que esta fue la ciudad donde Franco se asentó durante la Guerra Civil, y con ese antecedente las formas de resistir tenían que estar a la altura.

Mi despedida en Colombia, con mis compañeras de Mujeres Caminando por la Verdad, pretendía ser silenciosa: subir a La Escombrera como quien cumple un ritual. Sabía que estaría meses lejos de Medellín, desconectado de las excavaciones y de las acciones del Movice y del grupo de Mujeres. Pero la sensibilidad seguiría allí. Además, esos más de veinte años de lucha y búsqueda empezaban a dar frutos: los hallazgos recientes de restos óseos en ese lugar avivaban la esperanza de encontrar a Hermey.

Justo esa mañana, unos días antes de irme del país, la institución encargada de la búsqueda nos informó que la excavación se detendría. Argumentaban que el proyecto que sostenía el proceso había llegado a su fin y que no había recursos económicos para continuar buscando a nuestros desaparecidos. La noticia fue recibida con desazón. Entre el llanto y la rabia, una compañera alcanzó a reclamar a las funcionarias: ¿Por qué no está aquí la directora para dar esa información?! ¿Que dé la cara!

¿Y si bajamos hasta la excavación? Hagamos un plantón allá abajo y recogemos algunas imágenes para denunciar esto en los medios, les propuse, porque la resistencia nos caracteriza. Así, entre volquetas, retroexcavadoras, polvo y piedras sueltas, exigiendo nuestro derecho a la búsqueda, me despedí.

El camino hacia mi nueva casa es una larga recta en una barriada de casas con jardín y de una planta o dos plantas, en primavera, los árboles frutales con sus flores blancas y rosadas enmarcan la carretera. Al igual que en Medellín, vivo en las afueras, en el extrarradio. Al final de la larga recta, con su fachada amarilla y el tejado rojizo, se alza el penal. Se lo conté a Joana. Su respuesta fue inmediata: Esa cárcel tiene buena energía. Allí estuvo gente hermosa, y aunque hubo dolor, también hubo alegría. Estoy segura de que te llegará esa fuerza, que te bendecirán. Entre ellos, mi padre. No me cabe duda: llegarán cosas buenas.

Y entonces entendí: la memoria, aunque hecha de ausencias, también se teje con encuentros improbables. Entre Burgos y la Comuna 13, entre los represaliados en España y los desaparecidos en Colombia, entre Joana y yo, persiste un hilo invisible que enlaza la resistencia y nos recuerda que no toda memoria es tragedia: también puede ser fraternidad, comunidad y alegría.



Trabajos en La Escombrera de Medellín buscando personas desaparecidas



Cuarenta años de espejismo carbonero en La Guajira

Greyci Alejandra Solano Pérez. Lideresa sindical de los obreros del carbón y del sector comunal.

La minería de carbón, una de las bonanzas que ha vivido el departamento de la Guajira en Colombia, amenaza con cerrar dejando incertidumbre y problemas económicos, sociales, ambientales e hídricos y mucha desesperanza en los habitantes de esa maravillosa tierra afectada por el enclave de la multinacional Glencore en el valle fértil entre la Sierra Nevada y la Serranía de Perijá, atravesado por el río Ranchería.

En la década de los 70s llegó la minería

a La Guajira, una península del Caribe en la frontera con Venezuela, con una extensión de 20.848 kilómetros cuadrados y habitada por un millón de personas en su mayoría afrodescendientes e indígenas wayuu, dedicadas a la agricultura, la ganadería y el comercio.

La llegada de las empresas mineras fue impuesta como una oportunidad de desarrollo para una tierra que sufre el abandono estatal.

Con la minería de enclave del carbón -hace cuarenta años- llegó el desplazamien-



to forzado, grandes cambios culturales y en el modo de vivir, junto con el desarraigo de comunidades campesinas, afros y del pueblo indígena wayúú.

Con el consorcio Cerrejón conformado por Glencore, Anglo American y BHP Billiton llegó el bienestar para algunos y la desdicha para las mayorías.

Con la mina de El cerrejón creció la ambición y la disputa política por controlar la administración del departamento y la de municipios como Barrancas, Hatonuevo y Albania, que recibían “regalías” como llaman a las migajas que dejan las empresas por llevarse el carbón.

Los habitantes del territorio creyeron que valía la pena sacrificar el medio ambiente para mejorar la calidad de la vida, la educación, la atención en salud, las carreteras, el saneamiento básico de las viviendas y tener por fin unos servicios públicos de calidad.

Creímos en un espejismo, porque todo se quedó en sueños.

El carbón de alto valor calórico extraído

a cielo abierto fue un gran negocio para las multinacionales. Las “regalías” a cambio de destrozarnos el territorio fueron de manera sistemática robadas por los clanes políticos y por sus agentes. La Guajira se llenó de cráteres gigantes, de montañas de escombros y sus gentes se hundieron más en el hoyo de la pobreza y de la miseria.

La mina de El Cerrejón dio trabajo a 12.500 personas incluidos los contratistas. La mitad son guajiros puestos en el tajo, no en el área administrativa que es menos peligrosa. En las tareas de menor riesgo hay pocas oportunidades para los jóvenes profesionales que buscan un contrato en alcaldías, hospitales y escuelas, relegados, sin oportunidades de crecimiento profesional, por lo que emigran del territorio buscando mejor trabajo.

Los que tuvimos la oportunidad de trabajar en la mina conformamos el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón SINTRACARBON-CUT, para defender los derechos de los trabajadores y de las comunidades. Consciente de la justeza del bienestar de los habitantes, el





Marcha popular por el Guajiro

sindicato se articuló con las comunidades locales y enfrenta a las multinacionales por sus destrozos y atropellos, denuncia a los corruptos y a los grupos armados a disposición de quienes se roban las riquezas.

Con el paso de los años La Guajira y los tres municipios mineros, Barrancas, Hatunuevo y Albania, se convirtieron en una de las regiones más desiguales de Colombia. Lo que no se roban los clanes políticos se dilapidó en proyectos de infraestructura abandonados, como los grandes hospitales que solo prestan atención de primer nivel y las carreteras hacia zonas donde no vive nadie, mientras los campesinos de las zonas alejadas siguen aislados, abandonados.

La transición energética

En los últimos años se viene hablando de transición energética, lo que asusta a muchos guajiros porque implica el cierre de las minas de carbón.

Por un lado es positivo porque se ayuda a frenar la crisis climática al detenerse la destrucción y la contaminación que producen las minas. Por otra parte será un palo para la región guajira y para un entorno más amplio cuya economía se mueve con la minería. Se perderán 12.500 empleos directos y miles más indirectos y los municipios dejarán de recibir las “regalías” que no se roben, en una zona donde hay muchas necesidades básicas insatisfechas.

La concesión minera vence en el 2034,

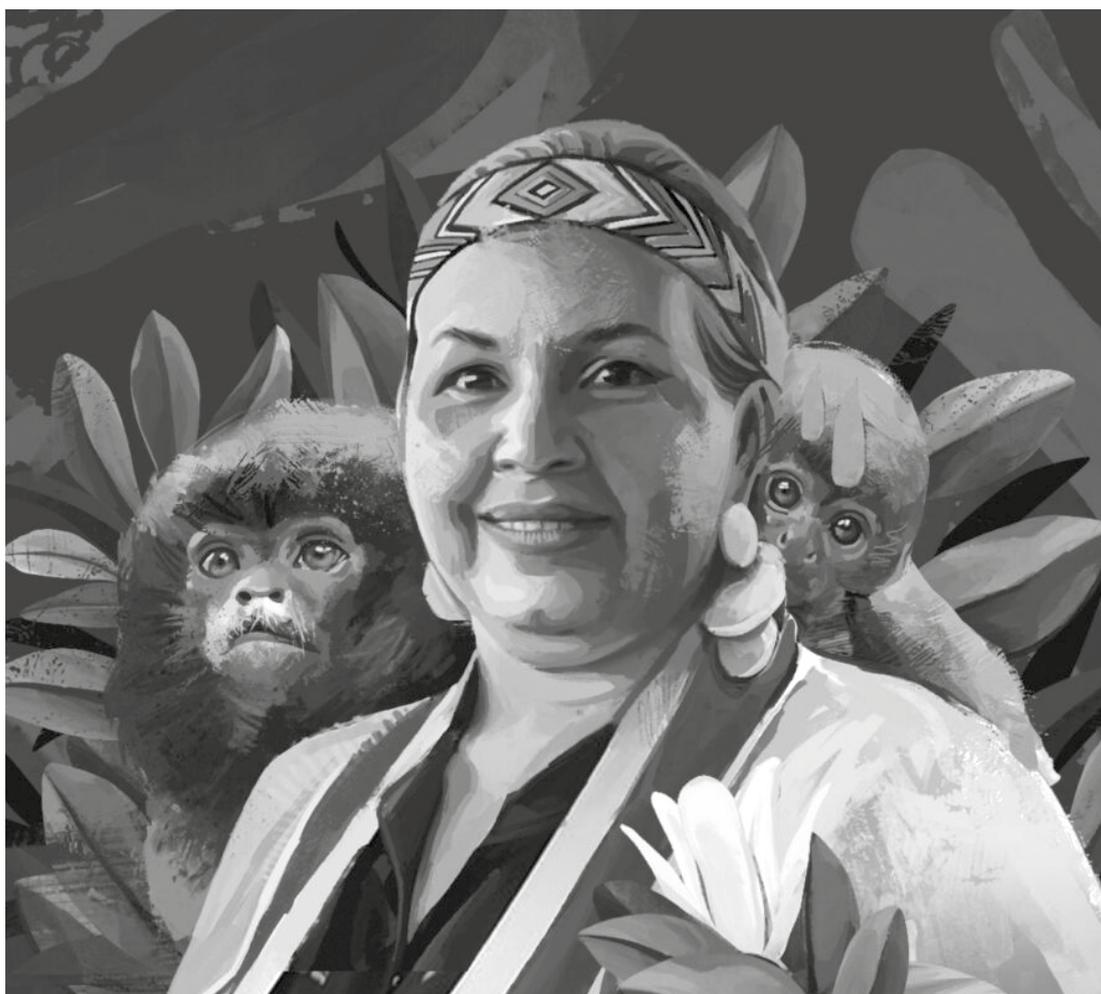
pero no hay normas para el cierre de mina. El pueblo guajiro y el sindicato queremos evitar que Glencore -actual propietaria de la mina- repita lo que hizo en el departamento del Cesar donde devolvió al Estado los títulos mineros y se marchó sin reparar los enormes daños ambientales, laborales, sociales y culturales causados.

Proponemos un plan de cierre en el que Glencore pague los daños causados y entregue sus activos para destinarlos al desarrollo de las fuerzas productivas, al turismo, la pesca, la dotación de tierras e infraestructuras como el tren, los aeropuertos y las vías.

Colombia viene realizando la transición energética con el fin de producir energías limpias para cuidar el medio ambiente y La Guajira tiene gran potencial para las energías alternativas, sin embargo no dará trabajo a toda la gente que hoy vive de la minería.

No hay una transición energética justa que es lo que necesita el territorio y las comunidades. Sigue pendiente el diálogo entre el Estado, Glencore, el sindicato y las comunidades para un cierre de la mina que sea responsable y justo en lo laboral, social, económico, ambiental y cultural.

La Guajira tiene el reto de salir del espejismo minero y reinventarse. Se necesita el compromiso de Glencore y de los gobiernos y la población guajira y el sindicato minero se movilizará para conseguirlo.



Riesgo para la vida en la región andino-amazónica

ASINTRACAMPIC, Asociación Municipal de Trabajadoras-es Campesinos de Piamonte Cauca, es una organización social de base en la región andino-amazónica, territorio de selvas, agua abundante y gran biodiversidad. La dirigencia y las bases de ASINTRACAMPIC están siendo perseguidas por defender la vida, la autonomía y la economía campesina. Se oponen al derribo de las selvas por los carteles del petróleo, de la minería y de la coca, que avanzan apoyados por las disidencias de las FARC, por bandas criminales y por grupos narco-paramilitares aupados por las autoridades

corruptas de la región y por empresarios nacionales y extranjeros acostumbrados al uso del terror para enriquecerse mediante el despojo.

Al suroccidente de Colombia se encuentra la región andino - amazónica, zona de frontera con Ecuador y Perú. Comprende todo el departamento del Putumayo, parte del departamento del Caquetá, los municipios de Piamonte y Santa Rosa en el Cauca y Jardines de Sucumbíos en Ipiales - Nariño.

Contiene una enorme biodiversidad por la variedad de climas que van desde el

frio en la subregión del Alto Putumayo, las zonas templadas y el calor propio de la zona ecuatorial en la llanura selvática que conforma parte de la cuenca del río Amazonas.

Esta zona habitada desde hace milenios por los pueblos indígenas kamentsá, siona y cofán, fue colonizada por campesinos colombianos del interior del país, por los misioneros capuchinos expulsados del Ecuador con la reforma agraria de Eloy Alfaro y -antes- por los empresarios peruanos de la Casa Arana que llegaron como buitres y se expandieron esclavizando hasta casi exterminar a los indígenas extrayendo la savia del árbol del caucho en lo profundo de las selvas, goma que vendían en el puerto de Iquitos con el apoyo del capital británico.

LLEGAN LOS BUITRES DEL PETRÓLEO, EL COBRE Y EL MOLIBDENO

La llegada de las petroleras Gran Tierra Energy, VETRA, Suroco Energ, Frontera Energy, SierraCol Energy, GeoPark y Eco-petrol, han causado enormes daños ambientales al campesinado y a los territorios ancestrales del pueblo indígena Inga.

Las petroleras extraen el crudo y lo transportan hacia los puertos o las refinерías, dejando un rastro negro de destrucción en las selvas, la contaminación de las tierras y de los cursos de agua en una de las zonas más frágiles y de mayor biodiversidad del mundo.

Estos buitres, auténticos carteles del petróleo, junto con los carteles del narcotráfico, se benefician de la violencia extrema para ejecutar un despojo que amenaza con perpetuarse con los cuatro proyectos mineros que tiene en la mira la multinacional minera canadiense Libero Copper que intenta pasar desapercibida para no levantar el polvo de la resistencia campesina, indígena y negra.

Por eso cambió su nombre por el de Co-



pper Giant Resources Corp., que en asocio con la Anglo Asian se metió sigilosa -en octubre del 2024- en la Cumbre de la Coop16 en Cali, mostrándose “preocupada” por la conservación del agua en la cuenca del río Putumayo, hasta que el campesinado y los indígenas la descubrieron y la desenmascararon a gritos.

La “desinteresada” Libero Copper venía de ser “Patrocinador oro” del XX Congreso Colombiano de Geología y de infiltrarse en el equipo que hace estudios geológicos para prevenir tragedias como la avalancha que arrasó -a finales de marzo del 2017- varios barrios de la ciudad de Mocoa, matando más de 335 personas en la capital del Putumayo.

La Copper Giant Resources Corp, como se llama ahora, vuela rasante y sin ruido haciendo los estudios geológicos en la fase exploratoria para asentar la mega mina que pretende saquear 4.600 millones de libras de cobre y 510 millones de libras de molibdeno que yacen en las selvas que ribetea al río Putumayo.

Las comunidades campesinas, indígenas y negras y sus organizaciones en la región le plantarán cara a la Copper, pero están siendo amenazadas con el evidente propósito de paralizar la resistencia comunitaria mediante el miedo y proceder al saqueo.

AUTOGESTIÓN MÁS QUE GOBIERNO

Los habitantes actuales de esta región periférica han tenido que resolver con autogestión comunitaria la falta de infraestructura y de servicios básicos ante la desidia de los diferentes gobiernos y enfrentarse con las crueldades de la guerra interna entre las guerrillas y el Estado, en la que no se respeta a la población civil, ni las normas mínimas del Derecho Internacional Humanitario.

El desarrollo extractivista y sus secue-

las vienen siendo enfrentadas por los procesos de resistencia campesina, indígena y negra.

ASINTRACAMPIC es parte de la resistencia por la vida y el territorio desde su creación el 15 de julio del 2013. Tiene reconocimiento legal y sede principal en el municipio de Piamente. Cuenta con seccionales en los departamentos del Caquetá, Huila, Cauca y Cundinamarca dedicadas a defender los territorios, a proteger el medio ambiente, promover la defensa de los derechos humanos y la justicia ambiental.

Es una organización autónoma que promueve prácticas sostenibles en la producción de alimentos. Cuenta con una planta de transformación de productos amazónicos fruto de la participación en el Paro Agrario del 2013. Dentro de la lucha por la tierra promueve la constitución de una Zona de Reserva Campesina como una territorialidad orientada a la protección y al desarrollo de la economía campesina y a la preservación de la biodiversidad amenazadas por la voracidad del capital transnacional incluidas las mineras y el narcotráfico.

El campesinado de la región andino amazónica, cansado de la guerra interminable, quiere la paz con justicia social. Por eso ASINTRACAMPIC participó en la difusión pedagógica del Acuerdo de Paz después de la desmovilización de las FARC-EP en el 2016.

Desde su nacimiento la dirigencia y las bases de ASINTRACAMPIC han sido perseguidas mediante amenazas, señalamientos, desplazamientos forzados y el asesinato de asociados, acciones violentas hechas por bandas, instituciones y grupos armados del Estado colombiano.

Después del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP hubo un tiempo de tranquilidad que duró porque el conflicto social, político y armado se ha reconfigurado y desató la violencia en toda la región incluyendo el municipio de Pia-



monte.

LA COCA, OTRO PROBLEMA

ASINTRACAMPIC aprobó que sus 900 familias afiliadas se dispusieran a sustituir los cultivos de hoja de coca con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, en cumplimiento del Punto 4 del Acuerdo Final de Paz.

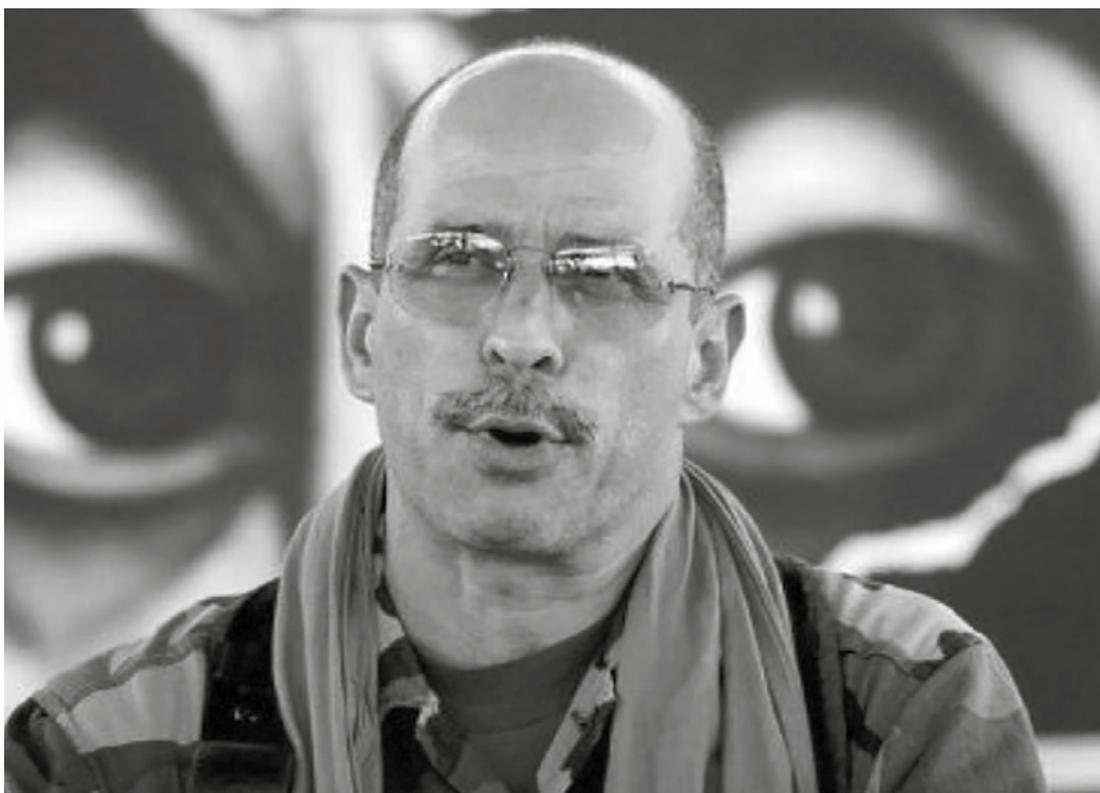
Más de seis años después de iniciar el Plan de sustitución el narcotráfico se expande, también el consumo de drogas y la falta de ingresos para la subsistencia del campesinado que se esmeró en arrancar miles de hectáreas de cultivos de coca.

Este fracaso se genera en el incumplimiento por los gobiernos de turno de los compromisos adquiridos con las familias campesinas, obligadas por la pobreza a volver a sembrar coca para subsistir y solventar sus necesidades básicas, a pesar de que son conscientes de que alrededor de este cultivo hay mucha violencia entre los grupos armados que se disputan el control de las plantaciones, la custodia de los laboratorios y la protección de las rutas para el narcotráfico.

La colonización no termina

La colonización violenta del área andino amazónica lleva varios siglos y no termina. Continúa de la mano de las mafias del narcotráfico y de las empresas mineras y petroleras que llegan con sus grupos de bandidos, amenazando, corrompiendo, matando y desplazando.

Llamamos a los ambientalistas de todos los países a ayudarnos en la protección del pulmón del mundo acompañando a los pueblos, comunidades y organizaciones que a pesar del miedo no cedemos ante los intereses de los grupos armados y de las transnacionales que se adueñan de los territorios, de la vida, de los gobiernos locales y del futuro colectivo.



Simón Trinidad, preso político colombiano en los Estados Unidos

Desde hace 20 años está privado de la libertad, incomunicado, en una celda bajo tierra y siempre con la luz encendida, sin acceso a lecturas y sin la posibilidad de escribir en la prisión de máxima seguridad de USP FLORENCE ADMAX, en la ciudad de Florence, Estado de Colorado, Estados Unidos, **JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA**, conocido como Simón Trinidad, integrante del Estado Mayor del Bloque Caribe de las FARC, detenido en Quito- Ecuador el 2 de enero del 2004 cuando iba a reunirse con un delegado de la ONU y extraditado el 31 de diciembre

del 2004 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a los Estados Unidos.

Campaña Simón Libertad: “Simón, te arrancaremos de las sombras”

Aunque regocija celebrar su vida y su inquebrantable moral, también entristece en lo más profundo del corazón, la larga ausencia del hijo, padre, hermano, compañero, amigo, camarada. Desde hace 22 años, permanece privado de su libertad. Veintiuno de esos años, lo ha pasado en una de las más infranqueables prisiones de máxima seguridad en los Estados Unidos:

la Súper Max o Alcatraz de las Rocosas, en Florence, Colorado.

A Simón le han negado en EE. UU. sus más elementales derechos, incluido el acceso a un abogado de confianza durante el juicio. Aun así, logró demostrar ante el jurado de conciencia que era inocente del cargo de narcotráfico, por el que fue ilegítimamente extraditado desde Colombia el 31 de diciembre de 2004, desconociendo su condición de prisionero político.

Derrumbado el montaje, las autoridades le imputaron un nuevo cargo: “conspiración para retener a tres ciudadanos norteamericanos”. Se trataba de los tres “contratistas”, Marc Gonsalves, Keith Stansell y Tom Howes, cuya aeronave tuvo el infortunio de venirse abajo, en un área de control de la otrora guerrilla de las FARC-EP, mientras hacían inteligencia aérea en territorio colombiano.

Aunque los tres contratistas estuvieron en poder de esa insurgencia, en el hecho no tuvo participación directa ni indirecta Simón Trinidad, a quien condenaron en Estados Unidos a 20 años de prisión, por cada uno de ellos.

Sus condiciones

En prisión, sus condiciones son extremas. Según su abogado en Estados Unidos, Mark Burton, “Simón Trinidad desde que llegó a los Estados Unidos ha tenido un tra-

to infrahumano”. Se encuentra sometido a un régimen extremo, llamado Medida Especial Administrativa, que limita al máximo su contacto con el mundo exterior, con escasas y monitoreadas llamadas y visitas de algunos familiares y sus abogados.

Por un año, Simón Trinidad permaneció en aislamiento total, en una celda bajo tierra día y noche bajo una luz blanca, sin saber si amanecía o anochecía. Ni él, ni sus escasos visitantes tienen permitido transmitir mensajes de terceros, y tampoco puede recibir correspondencia.

Solo desde el 2016, puede compartir con otros tres prisioneros durante dos horas de almuerzo, recibir algunos libros y ver televisión. Su caso jurídico en Estados Unidos, sostiene Burton, “se cerró en 2012 y no hay muchas posibilidades de revisarlo, porque bajo las leyes de aquí, es muy difícil; pero hay posibilidades jurídicas pero también políticas, por eso necesitamos que ustedes apoyen a Simón para su liberación”.

Simón Trinidad cumple así sesenta años de condena, por hechos que no cometió. Es un trofeo de guerra, resultado del odio del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el imperio norteamericano, contra una organización rebelde, las FARC-EP, que pactó la paz en el 2016.

Repatriación humanitaria y libertad para Simón Trinidad





Estudiantes hilando la Paz

Stiven Jesús Maldonado Álvarez. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico y defensor de los Derechos Humanos.

Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate”. Es la consigna que resuena en cada corredor, en las calles tomadas por la movilización social, en cada aula, en cada mural de nuestras universidades públicas.

Hoy más que nunca los estudiantes colombianos luchamos por la paz con verdad y dignidad, reconstruimos los hilos rotos de la memoria para asegurarnos un futuro

distinto a la guerra.

No olvidamos a centenares de miles de víctimas del conflicto armado interno y del terror de Estado, muchas de ellas estudiantes. Y no perdonamos, porque la cobardía de los victimarios no les permite dar la cara y hacerse cargo de sus crímenes diciendo: “Fuimos nosotros, lo hicimos porque teníamos miedo de sus ideas, cumplíamos ordenes, seguíamos los manuales de la doctrina del enemigo interno fabricada en los Estados Unidos... perdón por causarles tanto dolor”.

Colombia arrastra una historia marcada por la violencia política, la represión y el silenciamiento de las voces críticas. El movimiento estudiantil ha sido un blanco constante del aparato estatal, del paramilitarismo, de los intereses económicos que ven en la educación un botín, y no un derecho.

Frente a ello, la memoria, la organización y la lucha colectiva se han constituido en pilares de resistencia. En medio de nuevos desafíos y viejas heridas las y los estudiantes exigimos verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición. Exigimos justicia social, una universidad pública y popular de calidad, del tamaño de nuestros sueños, y el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva por las afectaciones sistemáticas sufridas en el marco del conflicto armado.

El movimiento estudiantil colombiano ha sido históricamente una fuerza de avanzada en las luchas democráticas del país, desde las movilizaciones de hace un siglo

hasta las más recientes contra la reforma de la Ley 30, las jornadas del 2011, las del 2018 por la financiación de la universidad pública y el estallido social del 2021.

En la lucha popular colombiana las universidades son un foro de pensamiento crítico y un espacio de disputa por la calidad de la educación que debe ser del pueblo y para el pueblo, confluyendo con la lucha general por construir un nuevo país, justo, libre, democrático y soberano para todos, todas y todes.

El protagonismo de la juventud estudiantil en la lucha popular ha tenido un alto costo. Así lo concluye el informe Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia, (2000 – 2019), elaborado por la Asociación Jorge Adolfo Freyter Romero. Centenares de líderes estudiantiles han sido víctimas de amenazas, desaparición forzada, asesinato selectivo, y apresamiento mediante montajes judiciales. Uno de los claustros más afectados por el terror oficial es la Universidad del Atlántico con



sede en la ciudad de Barranquilla, en la que se han perpetrado atentados con explosivos, asesinatos, masacres, estigmatización, criminalización y cooptación.

Las graves violaciones de los derechos humanos y de la autonomía universitaria no son casuales, porque las élites perciben al movimiento estudiantil como un peligro real para su hegemonía dado que denunciamos la corrupción que se come los presupuestos públicos, rechazamos el neoliberalismo y la mentira del libre mercado, así como la mercantilización de la educación subordinada al capital.

Porque sembramos memoria cuando nos quieren imponer el olvido.

La juventud colombiana levanta voces contra el memoricidio, que pretende borrar nuestras luchas, muertos e historias. Por eso reivindicamos una pedagogía de la memoria para la no repetición, porque sin memoria no hay democracia posible. Porque sin verdad, sin justicia y sin reparación, toda paz será incompleta, efímera, falsa.

La exigencia del reconocimiento del movimiento estudiantil como sujeto de reparación colectiva es un acto de justicia que nos debemos como país, ya que las universidades han sido blanco del paramilitarismo, de la represión más brutal de los agentes del Estado, de intereses mafiosos y clientelistas que han intentado reducir las a botines de guerra o empresas de servicios.

El estudiantado no se rinde. Desde la Federación de Estudiantes Universitarios FEU Atlántico, desde cada asamblea estudiantil, desde cada cartel pegado en las paredes de nuestras universidades, seguimos gritando: “Viva la U, vive la paz”. Queremos una educación de calidad con universidades públicas investigativas, humanistas, incluyentes, científicas, populares, comprometidas con la transformación territorial.

Mientras tanto, el dolor seguirá anclado en nuestros corazones y las lágrimas que recorren nuestra memoria serán el catalizador de la búsqueda incesante de la verdad.

La Paz con justicia social implica el desmonte del narco-paramilitarismo, la dignificación de la protesta social, el fortalecimiento de la educación pública y el reconocimiento del daño causado por décadas de represión.

Como estudiantes, hilamos para la paz desde la memoria para que el olvido no triunfe. Organizamos resistencia para que la impunidad no se imponga. Seguimos luchando, no por nostalgia del pasado, sino por amor al porvenir.

¡Por la vida, por el pan, por la dignidad, por la justicia y por la paz!

¡Nuestra voz seguirá gritando al firmamento a la espera de encontrar oídos solidarios!

En memoria de quienes ya no están, con el compromiso firme de quienes continuamos su trabajo, seguimos siendo el sueño de Bolívar, estudiando, con la frente en alto, el corazón ardiente y la convicción intacta.





Nos echan bala, les devolvemos canciones

Javier Orozco Peñaranda. Coordinador del PAV-DDHH.

Andrés alimentaba a los pájaros cuando lo cruzaron cuatro balazos. En el predio La Europa no se oían disparos desde que el ejército levantó a plomo el monte para sacar a los campesinos de sus tierras con la excusa de combatir a las FARC.

El eco de las detonaciones espantó a las aves y a los campesinos que luchan por la reforma agraria sin tener sitio seguro en los Montes de María desde hace treinta años.

Herido y caminando llegó hasta el hospital de Ovejas donde se regó la noticia del atentado contra el gaitero mayor de la sabana. La justicia detuvo unos días al agresor que resultó ser el capataz del empresario que usurpó las tierras abandonadas por las familias campesinas aterrorizadas por tanta masacre.

A punta de plomo fueron abandonadas las tierras de La Europa, una finca que el gobierno había entregado en 1969 a un centenar de jornaleros como Andrés Nar-

váez Reyes, destinados a ser vaqueros en los latifundios ganaderos o jornaleros en las plantaciones de tabaco en los territorios despojados al pueblo finzenú, indígenas diezmados por la esclavitud y por el confinamiento desde que el gobernador español de Cartagena, Antonio de La Torre y Miranda cumpliera las órdenes del virrey “para que construyera poblaciones para las infinitas almas que vivían dispersas en las provincias internadas en los montes, faltas de religión, política y nacionalidad, siendo perjudiciales al estado.”

Cuando Andrés era un chico la región de Ovejas no contaba con energía eléctrica y la carretera era un camino polvoriento sobre el que los burros dormían su tristeza. Los árboles de matarratón ribeteaban los inmensos cultivos de tabaco y los obreros endeudados por los anticipos, cobraban en víveres que sacaban al fiado en las tiendas de los empresarios. Al medio día Andrés y otros jornaleros dormían el cansancio entre el vaho de las hojas de tabaco colgadas al viento en las costillas del caney.

Era una época difícil evocada por Andrés en los versos que compuso en memoria de sus padres:

“Ese olor a tabaco me produce nostalgia, cuando suenan las gaitas se florece la montaña, y ese sonar de tambores que son suspiros del alma...”

En La Europa solo quedaron cinco familias arrinconadas por diez años de combates entre las guerrillas y los paramilitares aliados con la fuerza Pública. El resto huyeron de madrugada en medio de bombardeos, con los ojos escaldados por el humo de los ranchos incendiados y por el horror público desatado por los paramilitares y los gamonales políticos de Uribe Vélez con las masacres en Chengue, El Salado, Pigiguay, Pativaca, Chalán y Pichilín.

Los campesinos salieron con lo puesto, lo perdieron todo. Andrés lo cantó quitándose el sombrero ante los estudiantes de la facultad de pedagogía en la Universidad de

Oviedo, sin el apoyo sonoro de las flautas shuana llamadas gaitas por los conquistadores:

“Antes yo vivía contento, de mí era toda la alegría,
Y ahora que me pasó esto, ¡qué mala suerte la mía ;
Hay no tengo ná, no tengo ná, sino ganas de llorá.
La guerra y el libre comercio me pudieron desplazar,
ahora soy un pobre campesino al que le toca mendigar.
No tengo ná, no tengo ná, me tuve que desplazar...”

Refugiado en Gijón

Al 2016, año de la paz con las FARC, la comunidad de La Europa llegó con veintitrés asesinados, seis desaparecidos y un centenar de familias desplazadas que regresaron a las tierras tras diez años de exilio bajo la consigna de que “No aceptamos que la paz nos cuente la vida.”

Ese año Andrés y cuatro compañeros más amenazados de muerte llegaron a Gijón. Henry, un defensor de los derechos humanos que se busca la vida como vendedor ambulante bajo la amenaza de miembros de la fuerza pública que atentaron contra su vida en una calle de Bogotá por denunciar que en el 2004 los militares se llevaron a su hermano, lo asesinaron, le pusieron botas y armas y lo presentaron con gesto heroico como “guerrillero dado de baja en combate”. José Manuel, sindicalista de la federación de cafeteros declarado objetivo militar dentro de una operación de “limpieza social”. Darwin, joven periodista amenazado por acompañar en la denuncia a los pescadores y campesinos opuestos a la construcción por ENDESA de la represa de El Quimbo. Y Euclides, autoridad del pueblo indígena eperera siapidaara, sobreviviente de la masacre del Naya en la que 220 paramilitares armados en Cali por el ejército nacional asesinaron al menos a veinticuatro indígenas y a descendientes de los negros que huyeron de la esclavitud desde el

Valle y el Cauca hacia las selvas húmedas del Pacífico.

Andrés devolvió con un mar de tristeza en los ojos el abrazo de bienvenida de la gente de Soldepaz y de otros colectivos en Gijón. Saludaba de mano, con varios dedos paralizados por los balazos. Tenía frescas las heridas y afrontaba otro destierro en una Europa que no era la suya que había quedado lejos, sumida en otro ciclo de violencia.

Una madrugada Andrés dejó en el cristal de la ventana del piso municipal el vaho de los vinos compartidos en la bodega central del barrio La Calzada, con obreros jubilados de las minas, del mar, de los astilleros... Con la mirada perdida se arrancó a cantar:

“Yo quiero mucho a mi tierra y recuerdo todos los días,
el verde de las montañas de los Montes de María.
Ahora que vivo tan lejos, mis gaitas no las puedo oír,
yo soy un hombre pensante, que estoy allá y estoy aquí:
en mi mente la plaza del pueblo, con gaiteros vestidos de blanco,
y esa agradable brisa que llega a la sombra del caucho,
y esas calles empinadas que anduve cuando muchacho...”

En septiembre Andrés y el grupo de refugiados colombianos subió con jóvenes anarquistas por los caminos de Peña Mayor, entre las vacadas que pacen flores de manzanilla silvestre.

La romería llegó hasta el Pozo Funeres para rendir homenaje a los republicanos asesinados y arrojados al fondo de la sima por el franquismo, nueve años después de terminada la guerra civil.

Allí Andrés improvisó unos versos que fueron acompañados por los acordes que un joven de la zona le sacó a su guitarra:

“En este pozo profundo los tiraron moribundos,

Ellos eran los buenos y estos el ejemplo malo pal mundo,
no los dejaban pensar, el remedio era matar,
a nombre de la libertad que no les quisieron dar...”

Los informes que llegaban de Ovejas a Xixón decían que los paramilitares habían vuelto a La Europa y que merodeaban armados, amenazantes.

En la Europa solidaria de la tranquilidad y de las manzanas era otoño, los bosques de hayas se vestían de rojo y la brisa traía el aroma dulzón de las castañas en brasas y llegaba el inquietante aviso del regreso a América.

Entonces Andrés perdió el sueño y se dedicó a componer.

“Que linda es la luna de España, se parece a la luna ovejera
está arriba de los cielos, rodeada de miles de estrellas,
y se esconde en el mar azul como si fuera en Coveñas.

Oh bella gaviota blanca, ve a esas lejanas tierras
y tráeme versos, melodías de bella gaita Ovejera
de grandes compositores de los Montes de María.

Cuando se esconde la luna el sol empieza a nacer,
mi tierra tiene tantas cosas que en la distancia quisiera tener,
La risa de mis vecinos, el saludo de mis amigos,
que han compartido conmigo lo más grande de mi folclor,
por eso es lo que los admiro y los recuerdo y me da dolor...”

No solo cambió el clima, cambiaron los tiempos. En Colombia la gente votó en el referendo contra el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC. ¿Cuánto miedo le metieron desde los medios a un pueblo cansado de la guerra para volverla interminable?

Asturias se durmió entre el orbayu. Andrés regresó en noviembre a su tierra con

unos zapatos nuevos y la alegría de volver a abrazar a sus amigos. Por poco no puede hacerlo con Argemiro Lara que sobrevivió a un atentado esa semana, siendo líder por la restitución de La Europa y candidato al consejo municipal por un partido de izquierda casi exterminado.

Los sicarios regresaron. Se mueven por la región. Varias veces han preguntado por Andrés que no pudo volver a alimentar los pájaros.

Los paramilitares están por todas partes, dice tomándose un café para hacer más corta la espera de la orden de un juez de Cartagena para que el primer gobierno progresista en la historia de Colombia les devuelva La Europa.

Hace poco un grupo de jóvenes grabaron una película sobre la vida de Andrés.

Las cámaras siguieron su rastro en las calles de La Calzada en Xixón, en el Monte Areo, en Bogotá y en los Montes de María.

Le preguntaron si un escolta a pie era suficiente protección ante los matones que lo buscan hace años. No, dijo. Lo único seguro es que queremos la paz y que si nos echan bala, les devolvemos canciones.



Andrés Narvárez Reyes, compositor popular de gaita. Acogido por el Programa Asturiano en el 2016



Henry Ramírez Daza, sindicalista acogido en Asturias en el 2003

Nuestros muertos

Al principio, cuando el programa asturiano de protección comenzaba su tarea, nos costaba relatar el horror colombiano de manera creíble.

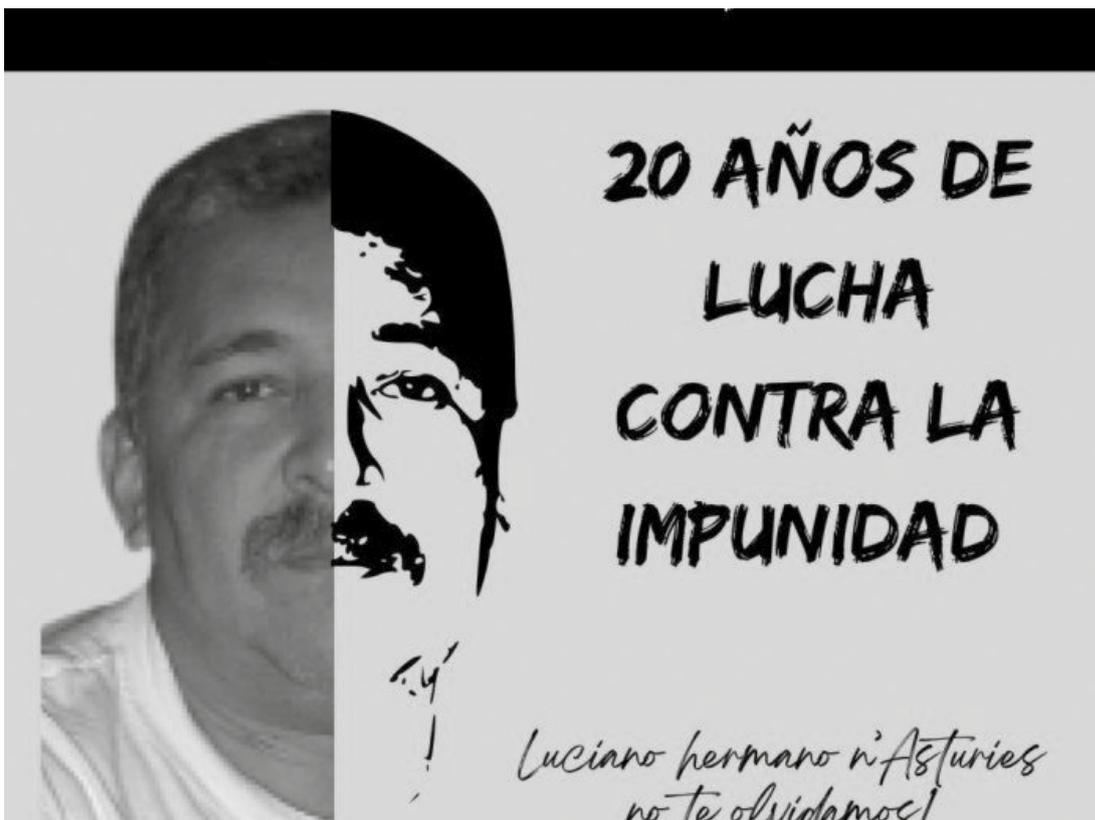
La “democracia más estable de América” tenía muy buenos aliados en el gobierno español y mucha prensa masiva, suficiente como para lavarle la cara a las élites criollas, negar ciertas violencias o para justificar -incluso- el terrorismo de Estado como un mal necesario.

Los narco-paramilitares de El Chocó están cortando cabezas y jugando al fútbol

con ellas en las plazas públicas, denunciábamos. Había quien lo atribuía a la imaginación tropical.

Finalizaba el 2001 y las empresas multinacionales pagaban matanzas y prensa para seguir “limpios” mientras se aprovechaban del terror... Coca Cola, Drummond, Nestlé, muchas mineras y petroleras. La gente solidaria de Asturias nos oía con respeto, sin embargo, como que no podía ser verdad tanto horror.

El día que decidimos con Amnistía Internacional y Soldepaz echar a andar un



programa de protección, caían las torres gemelas en Nueva York. El mundo árabe veía venir invasiones, pero las gentes de Colombia ya éramos sospechosos de robos, tráfico, prostitución, terrorismo, violencias varias.

En esas nos tocó el domingo 11 de abril del 20025, fiestas de San Mateo de Oviedo y una noticia terrible. Nuestro compañero de refugio asturiano LUCIANO ROMERO MOLINA había sido retenido, torturado y asesinado por los paramilitares.

Hubo la reacción masiva de la solidaridad asturiana. LUCIANO fue conocido en Gijón. Este crimen quitaba las dudas.

El director de la cooperación asturiana RAFA PALACIOS se lo dijo en la cara y en su despacho al Fiscal General de Colombia Mario Iguarán, empecinado en la tesis infame de culpar a la familia de Luciano mientras sosteníamos que el de Luciano era un crimen de Estado, un asesinato pagado por la Nestlé a los paramilitares, lo que se demostró años más tarde.

En Asturias se afianzó la certeza de que ser sindicalista en Colombia era muy peli-

groso. Esto se reconfirmó con el asesinato de HENRY RAMIREZ DAZA en el 2010, otro dirigente sindical de la CUT refugiado en Asturias y asesinado por enfrentar la corrupción en el municipio de Ambalema.

En el vigésimo aniversario del asesinato de Luciano rendimos homenaje a su memoria y a la de Henry... a la de más de 3.200 compañeras-os asesinados por el terrorismo patronal desplegado en Colombia.





Con el apoyo de  PROTECT DEFENDERS.EU

